LITORALPRESS

Fecha: 20-08-2025
Medio: Le Monde Diplomatique
Supl. : Le Monde Diplomatique
Tipo: Columnas de Opinión
Título: COLUMNAS DE OPINIÓN: El poder territorial

Pág. : 4
Cm2: 716,0
VPE: $ 1.346.741

Tiraje: 6.200
Lectoría: 18.600
Favorabilidad: No Definida

El trabajo electoral de redes locales decidirá las elecciones chilenas

El poder territorial

por Álvaro Ramis*

Se acerca el segundo semestre de 2025 y, con él, la efervescencia de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Como es costumbre, el análisis político se centra en las estrategias de los partidos, las alianzas entre grupos empresariales y gremiales, e incluso en las figuras mediáticas que, con su indecisión o desmarcación, parecieran tener la llave del futuro político del país. Sin duda, todos estos actores ejercen una influencia considerable en el devenir electoral. Sus declaraciones, sus financiamientos y sus movimientos estratégicos son observados con lupa, y con razón. Sin embargo, en esta ecuación que busca predecir el pulso ciudadano, se omite con demasiada frecuencia al verdadero gigante dormido: el poder territorial.

Es un error persistente cifrar el resultado de las elecciones exclusivamente en las cúpulas. Se desconcuenta, en gran medida, la capilaridad del poder local y regional, que actúa como el verdadero nervio del sistema político. Mientras los partidos debaten en el Congreso y las élites empresariales definen sus apoyos, en cada municipio y en cada región se está gestando un entramado de relaciones, lealtades y gestiones que, a fin de cuentas, moviliza el voto de manera más directa y efectiva. El poder territorial no es una abstracción, sino una realidad palpable encarnada en miles de figuras que interactúan día a día con la ciudadanía.

En Chile, contamos con una vasta red de representantes locales y regionales que son el primer punto de contacto entre el Estado y las personas. Pensemos en las cifras: 2.252 concejales municipales, 345 alcaldes, 302 consejeros regionales (CORE) y 16 gobernadores regionales. Cada uno de ellos, desde su posición, construye relaciones de confianza, atiende demandas, gestiona recursos y, en definitiva, se convierte en un referente para su comunidad.

Son estos actores los que conocen de cerca las necesidades de sus vecinos, las problemáticas específicas de sus barrios y las aspiraciones de sus comunas. Sus gestiones, sean grandes obras o pequeñas soluciones cotidianas, se traducen en capital político que se acumula y se proyecta en cada elección. Un alcalde que ha logrado mejorar la infraestructura local, un concejal que ha impulsado iniciativas comunitarias o un gobernador regional que ha articulado proyectos de desarrollo, generan un arrastre de votos que trasciende las consignas nacionales y los rostros televisivos. Pero la influencia territorial va más allá de las autoridades electas. En la base misma de la organización comunitaria se encuentran las juntas de vecinos y organismos similares, como los Comités de Seguridad Vecinal. En la actualidad, existen alrededor de 15.000 juntas de vecinos inscritas a nivel nacional, de las cuales unas 9.000 están activas, es decir, aproximadamente el 60% de las organizaciones registradas mantiene actividad efectiva.

Es cierto que, de acuerdo a estadísticas de 2022 (Casen), el nivel de participación ciudadana formal en juntas de vecinos era bajo, solo un 6.5% de la población participaba en alguna junta vecinal activa. Sin embargo, este bajo porcentaje no debe llevar a subestimar el peso del liderazgo vecinal. El liderazgo de las juntas de vecinos y organismos como los Comités de Seguridad Vecinal, aunque no siempre se traduzca en una participación masiva, sí representa un pulso vital de la comunidad. Estos líderes, pese a la baja participación formal, son quienes canalizan las demandas, organizan las movilizaciones y, en muchos casos, son los verdaderos referentes a la hora de influir en la opinión y el voto de sus representados. Su voz, su capacidad de convocatoria y su credibilidad en el entorno cercano son activos intangibles que ninguna campaña nacional puede replicar fácilmente.

Justicia territorial

Para comprender la magnitud de este tejido social organizado, más allá de las juntas de vecinos, el Catastro de Organizaciones de Interés Público (OIP), administrado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, nos ofrece una perspectiva reveladora. Según la información más actualizada disponible en la página oficial del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, este Catastro registra un impresionante total de 45.141 organizaciones. Si bien esta cifra abarca un amplio espectro de agrupaciones comunitarias que van más allá de los comités de seguridad específicos –incluyendo juntas de vecinos, uniones comunales y diversas organizaciones funcionales–, nos da una idea clara de la vasta red de participación ciudadana sobre la cual se asientan iniciativas como las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. La existencia de esta robusta infraestructura organizativa es un pilar fundamental para la articulación de esfuerzos en materia de prevención del delito y cohesión social, y, consecuentemente, un elemento clave en la configuración de las preferencias electorales a nivel local.

Precisamente, la principal demanda que emana de este poder territorial es la justicia territorial. Los alcaldes, los gobernadores y los líderes vecinales son los primeros en constatar las profundas asimetrías que existen entre regiones, entre comunas, e incluso dentro de un mismo territorio, entre hábitats desiguales y fragmentados por la mala distribución de las rentas. La raíz de esta injusticia se encuentra en el persistente centralismo que concentra recursos y decisiones en Santiago, en un diseño obsoleto y deficiente del Fondo Común Municipal que no corrige las disparidades y, de manera crucial, en la ausencia de una política pública efectiva que contenga y redistribuya los efectos del extractivismo, que genera riqueza a nivel nacional, pero a menudo deja a las comunidades locales con pasivos ambientales y sociales, y sin los beneficios proporcionales. Esta demanda por una distribución más equitativa de los recursos y por una mayor autonomía en la toma de decisiones locales resuena con fuerza en cada rincón del país y será un factor determinante en la orientación del voto.

Demandas y liderazgos

La lucha por la justicia territorial no es un concepto abstracto; se vive y se demanda diariamente en comunas como Puente Alto, La Cisterna, Pudahuel, San Joaquín y Cerro Navia, por mencionar algunas de las que ilustran de manera más cruda las asimetrías urbanas de Chile. En Puente Alto, por ejemplo, los vecinos han levantado la voz por la escasez hídrica y los problemas de infraestructura sanitaria, con colapsos de alcantarillado y cortes programados de agua que reflejan una planificación deficiente y una inversión desigual en servicios básicos, a pesar de ser la comuna más poblada del país. En La Cisterna, la congestión vehicular en sus principales arterias y la falta de inversión en seguridad en puntos clave como la Intermodal evidencian cómo el crecimiento desordenado y la centralidad de transporte no se traducen en mejoras proporcionales para la calidad de vida de sus residentes. Pudahuel, con su cercanía al aeropuerto, sufre los estragos de la contaminación ambiental y la proliferación de vertederos ilegales, así como los impactos de derrames de químicos, que afectan directamente la salud de sus habitantes, a menudo con una respuesta estatal insuficiente. San Joaquín, por su parte, lidia con el deterioro de su infraestructura, la falta de áreas verdes y el abandono de terrenos que generan inseguridad, reflejo de una planificación urbana que no ha logrado integrar y revitalizar sus espacios. Y en Cerro Navia, la segregación urbana se manifiesta en la falta de equipamiento, la precariedad de la vivienda y la exposición a riesgos ambientales y de delincuencia, que son el resultado de décadas de abandono y una distribución desigual de las inversiones.

En todas estas realidades, se destaca el incansable liderazgo de sus alcaldes y equipos municipales, quienes, con recursos muchas veces escasos y bajo el peso de un centralismo imperante, se han erigido como las principales voces de estas demandas ciudadanas, luchando por encontrar soluciones concretas a problemas estructurales que van más allá de su capacidad de gestión. A ellos se suma, a nivel regional, la figura del Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien ha consolidado un liderazgo territorial notable, no solo por su gestión en la región, sino por su constante denuncia de las injusticias ambientales y la inequitativa distribución del agua, convirtiéndose en un referente de la lucha por la justicia territorial a mayor escala.

A esta complejidad se suma una amenaza latente para el financiamiento municipal y, por ende, para la autonomía territorial: la persistente campaña de la derecha por eliminar las contribuciones inmobiliarias. Si bien bajo el argumento de aliviar la carga sobre los propietarios, esta medida, de concretarse, asestaría un golpe devastador a los presupuestos municipales. Las contribuciones son un elemento clave para el financiamiento de los servicios locales esenciales, desde el alumbrado público y el mantenimiento de áreas verdes hasta la seguridad ciudadana y la recolección de residuos. Su eliminación mermaría drásticamente la capacidad de los municipios, especialmente aquellos con menos recursos, para atender las necesidades de sus habitantes, acentuando aún más las desigualdades territoriales y el centralismo. Esta propuesta, que busca desfinanciar la gestión local, se contrapone directamente a la demanda de mayor justicia territorial y autonomía, y sin duda será un punto de fricción y debate crucial en la campaña electoral, movilizando a los actores territoriales en su defensa.

Cimientos sólidos

El poder territorial es el motor de la movilización electoral. Son los equipos municipales y regionales, junto a los líderes vecinales y las vastas redes de organizaciones de interés público, quienes organizan los "puerta a puerta", los que convocan a las reuniones vecinales, los que distribuyen la propaganda y los que, en última instancia, garantizan que el ciudadano acuda a las urnas. La lealtad y el reconocimiento que se construyen en el ámbito local son cimientos mucho más sólidos que las promesas vacías o los discursos grandilocuentes que a menudo caracterizan las campañas nacionales.

En las próximas elecciones de este 2025, quienes realmente definirán el resultado no serán únicamente los acuerdos cupulares o las figuras mediáticas, sino la capacidad de los partidos y las coaliciones de articular y potenciar su red territorial. Aquellas fuerzas políticas que logren sintonizar con los alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, y que sepan aprovechar el arraigo y la influencia de estas figuras y de los líderes de las miles de organizaciones comunitarias, así como recoger y dar respuesta efectiva a la sentida demanda por justicia territorial, al tiempo que defienden la sostenibilidad financiera de los municipios, serán las que verdaderamente inclinarán la balanza. Ignorar este poder latente es un error estratégico que puede costar caro. El futuro político de Chile se jugará, en gran medida, en la cancha de lo local. ■

*Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad.